

“Fue el Estado”

El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y la crisis política en México

“[...] ante el desastre del país, el vacío de las autoridades y donde el crimen organizado se confunde con los políticos, solo nos queda refundar el Estado.”

Francisco Toledo
(artista plástico mexicano)

FOTO Rogelio Marcial

Rogelio Marcial

Los hechos

Durante la tarde del viernes 26 de septiembre de 2014, un grupo de 46 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se trasladaba en autobús de esa localidad a la ciudad de Iguala. En su camino a la ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968, cuando el Ejército mexicano acribilló a miles de estudiantes en Tlatelolco por orden del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), estos estudiantes (todos varones) pararían en Iguala para “botear” (recabar dinero con botes) y cubrir así sus gastos de viaje. Aprovecharían un mitin-fiesta que se realizaba en la plaza central de Iguala en el

que, después de rendir su informe anual la entonces Titular del DIF¹ municipal María de los Ángeles Pineda Villa, se celebraban los avances de esta dependencia y se invitaba a la gente a apoyar la posibilidad de que Ángeles Pineda fuera impulsada como candidata del PRD (Partido de la Revolución Democrática) a la alcaldía de Iguala; cargo que en ese momento ocupaba su esposo José Luis Abarca Velázquez, quien llegara también a ese puesto por el propio PRD. La intención era, además de “botear”, sabotear los festejos oficiales de la pareja en el poder quienes desde el Ayuntamiento habían mantenido una política de recorte presupuestal y de libertades hacia su escuela rural. El arribo de los estudiantes a Iguala llegó a los oídos de Abarca, quien ordenó a Felipe Flores Velázquez, en ese momento jefe de Seguridad Pública de Iguala y hoy prófugo, que interceptara el camión y evitara así la pretendida intromisión de los jóvenes al acto oficial de su esposa.

Sin aún quedar claros los motivos y los detalles, la policía de Iguala instaló un cerco en la carretera a la entrada de la ciudad y sin miramientos, abrió fuego en contra del camión de los estudiantes. Allí cayeron muertos dos de ellos y uno quedó gravemente herido. Además, las balas alcanzaron a otras tres personas (“víctimas colaterales”, le llama el gobierno), privándolas de la vida. Ante estos sucesos, y con la llegada de profesores al lugar para auxiliar a sus alumnos, se solicitó el apoyo del Ejército ubicado en la zona para proteger a los estudiantes y trasladar al herido a un hospital. La respuesta fue ignorarlos y abandonarlos a su suerte (véase La Jornada, 2015a). Los demás estudiantes intentaron huir en el camión. Se dio una persecución y, en otro lugar, se presentó otro tiroteo siendo ya la madrugada del sábado 27 de septiembre. La policía se confundió de autobús y disparó a otro que transportaba al equipo de fútbol de tercera división (semiprofesional) de los Avispones de Chilpancingo (Guerrero), matando a uno de sus integrantes e hiriendo a otros (más “víctimas colaterales”). En total en ambos tiroteos fueron seis muertos (tres de ellos estudiantes de Ayotzinapa) y cinco heridos graves, además de 43 estudiantes desaparecidos. Cuando finalmente los elementos policiacos detuvieron al camión de los estudiantes, entre los que se sumaron policías de Cocula (municipio vecino de Iguala), los 43 jóvenes fueron trasladados y entregados a miembros del Cártel Guerreros Unidos por órdenes de Felipe Flores. Se sabe hoy que los policías de Iguala y Cocula que participaron en esto supusieron que los estudiantes eran miembros del Cártel de Los Rojos, enemigos acérrimos de Guerreros Unidos. Encabezados por El Cepillo (Felipe Rodríguez Salgado), miembros de Guerreros Unidos ejecutaron a los estudiantes y calcinaron sus cuerpos para no dejar pruebas (La Jornada, 2015e). El Cepillo ha confesado que, también creyendo que los estudiantes formaban parte de Los Rojos, los interrogó y se enteró que solo eran alumnos de la Normal Rural; pero que él recibió a la mayoría de los estudiantes ya muertos y que ejecutó a los que quedaban con vida.

1. El sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) del gobierno mexicano es el encargado de la atención, por medio de políticas públicas, del bienestar de las familias y centra sus esfuerzos en los niños y las niñas. Tiene representación en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) y una nociva tradición para sus labores ha implicado desde su fundación que las esposas de los funcionarios en activo sean sus titulares de “membrete” (solo de figura), pues también se nombra un(a) presidente(a) operativo(a). Así, la esposa del Presidente de la República en turno es la titular del DIF nacional, la del gobernador es la titular del DIF estatal (de cada provincia del país) y la esposa del Alcalde es la titular del DIF municipal.

El sujeto [“El Cepillo”] detalló que el 26 de septiembre él y otros compinches recibieron la orden de abordar unos vehículos para ayudar a la gente de Gildardo López, alias “El Cabo Gil”, lugarteniente del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias. En el lugar conocido como Loma de Coyotes lo esperaban “El Cabo Gil” y los mandos de las policías municipales de Iguala y Cocula en cinco patrullas y una camioneta blanca de redilas de tres toneladas, donde tenían detenido a un grupo de jóvenes. Según declaraciones, subieron a los estudiantes al vehículo de redilas y los llevaron al basurero de Cocula. Alrededor de 25 ya estaban muertos por asfixia y quedaban unos 15 vivos, a los que acribillaron a tiros y calcinaron para después regresar a Iguala. Los restos calcinados fueron colocados en bolsas negras de plástico que luego lanzaron al río San Juan de Cocula (Sin Embargo, 2015).

La noticia de estos sucesos lamentables pronto cubrió el territorio nacional, para posteriormente circular en medios internacionales. Los padres de los estudiantes desaparecidos se organizaron y, con el apoyo de la sociedad civil, exigieron la entrega de ellos bajo el lema “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!” El gobierno federal, a través de la PGR (Procuraduría General de la República), atrajo el caso tardíamente (casi una semana después de los acontecimientos) y se inició una búsqueda exhaustiva de los estudiantes por la zona. Se detectaron varias fosas clandestinas con cuerpos mutilados y/o calcinados en los alrededores de Iguala, pero sin confirmar que eran de los estudiantes. El gobierno de Enrique Peña Nieto enfatizó que no dejarían de buscarlos hasta encontrar pruebas fehacientes de su paradero, vivos o muertos. Pero no pudo explicar la razón de tantos cuerpos encontrados en fosas clandestinas, dejando ver con ello la terrible situación que se vive en Guerrero por la presencia de cárteles del crimen organizado, asociados estrechamente con las autoridades estatales y municipales.

Los padres de los desaparecidos recibieron el apoyo de un grupo argentino de antropólogos forenses ante la desconfianza hacia el gobierno, quienes lograron detectar restos de huesos en diferentes fosas y recopilarlos según se debe hacer. Por su parte, el gobierno mexicano envió muchos de estos restos humanos al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck (Austria), especializado en estos casos. Hasta la fecha, se sabe que uno de los huesos menos calcinados que se encontraron en el tiradero de basura de Cocula (Guerrero) perteneció a uno de los estudiantes de Ayotzinapa (Alexander Mora Venancio). Los demás fueron analizados por los expertos austriacos determinando cuatro meses después de los sucesos que “[...] tras la aplicación de una técnica de cuantificación muy sensible para evaluar la cantidad de ADN mitocondrial, no se encontró cantidad útil de ADN que permitiera obtener un perfil genético bajo esta técnica.” (La Jornada, 2015b). Lo que sigue es aplicar otra técnica más sofisticada, conocida como secuenciación masivamente paralela, la cual logra detectar mayor ADN que la ya empleada de cuantificación. Sin embargo, los expertos austriacos no aseguran éxito con esta técnica debido al grado de calcinación de los huesos enviados; pero aclararon que es altamente probable que, después de aplicarla, los restos queden aún más deteriorados e incapaces ya de aportar información alguna. En su reporte se reconoce que es el caso más difícil que han enfrentado en su historia y que cualquier resultado no podría

obtenerse antes de los tres meses (es decir, hasta finales de abril de 2015). El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam,² bajo el argumento de que si la evidencia no aporta datos entonces no es evidencia, autorizó al laboratorio de la Universidad de Innsbruck para proceder con el nuevo análisis. Ante la dificultad de este caso forense, expertos alemanes también ofrecieron su apoyo al gobierno mexicano.

Para el 23 de octubre de 2014, Ángel Aguirre Rivero pide licencia como Gobernador de Guerrero a petición de su partido político el PRD, para coadyuvar con ello en las investigaciones. Existía la exigencia de declarar la desaparición de poderes en Guerrero y esta salida del gobernador buscó no llegar a ello. El Congreso estatal nombró a Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino hasta nuevas elecciones.³ Por su parte, la PGR, encabezada por Murillo Karam, ha detenido a casi un centenar de presuntos responsables de estos actos de barbarie, entre quienes están el ex Alcalde de Iguala José L. Abarca (acusado ya de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado), su esposa Ángeles Pineda (acusada de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operación con recursos de procedencia ilícita), agentes de la policía de Cocula e Iguala, y miembros del Cártel Guerreros Unidos (entre los que se encuentran El Cepillo, El Cabo Gil y su cabecilla Sidronio Casarrubias). Se detuvo también a César Miguel Peñaloza Santana, Alcalde de Cocula, pero después lo liberó por “falta de pruebas”. El gran ausente entre estos detenidos y pieza clave de los actos de barbarie es, hasta la fecha, Felipe Flores, de quien se desconoce su paradero. Las movilizaciones ciudadanas durante estos cuatro meses lograron la solidaridad dentro y fuera de México. Las redes que se han tejido incluso a nivel internacional han logrado poner en jaque al gobierno federal de Peña Nieto, y ensombrecer con ello el supuesto avance de México en materia económica, de seguridad social, la democratización del país y, obviamente, el triunfo en la lucha contra el crimen organizado. Peña Nieto y su equipo han encontrado una fuerte crítica hacia su ineficiencia sobre todo en el exterior, lo que implica una crisis fuerte de legitimación.⁴

2. Murillo Karam ha sido fuertemente criticado debido a que, ante la incapacidad de la PGR para aclarar lo sucedido, en una conferencia de prensa afirmó que ya estaba “cansado”.

3. En un afán de legitimar sus acciones ante la crisis política originada por los sucesos lamentables en Ayotzinapa, el gobierno decide nombrar a Ortega como gobernador interino debido a sus antecedentes. Ortega ha sido profesor en la UAGro (Universidad Autónoma de Guerrero, la universidad pública de esta provincia) desde los años 70 del siglo XX. Sociólogo con Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Complutense (España), fue dirigente estudiantil en la propia UAGro y dos veces candidato a Rector. Militó en la ACNR (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, brazo político del movimiento guerrillero de Genaro Vázquez durante los años 1970 y 1980). En el 2009 fue denunciado ante la PGR por supuestos enlaces con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), sin comprobarle nada. También fue funcionario público como titular de la Subsecretaría de Educación Media y Superior de Guerrero, bajo las órdenes de Zeferino Torreblanca, otro gobernador salido de las filas del PRD. Es autor de varios libros y artículos académicos, y personaje reconocido en la entidad por su lucha por la democracia.

4. Como ha sucedido durante los últimos años con el caso del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de Chiapas, en el suroeste mexicano, la vinculación, difusión y apoyo desde el exterior ha logrado impactar con mucho más fuerza al Estado mexicano que lo que sucede cuando los problemas nacionales se quedan “encerrados” en México.

Finalmente las movilizaciones y protestas se mantienen en la entidad (Guerrero), sobre todo en Chilpancingo (su capital), Iguala y Acapulco, por parte de los padres de los estudiantes, sus compañeros de la Normal Rural, la CETEG⁵ (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero) y algunas fuerzas ciudadanas. Con tintes de una guerra civil, la ingobernabilidad en esta provincia ha implicado acciones violentas por parte de manifestantes que han prendido fuego a instalaciones, vehículos y equipo de la policía, el gobierno y comercios, especialmente en Iguala y Chilpancingo. Las movilizaciones en otras partes del país han aminorado, aunque existen colectivos y organizaciones que siguen de cerca los acontecimientos y difunden información al respecto, apoyando a los estudiantes compañeros y a los padres de familia de los desaparecidos. Esta situación también trae consigo una fuerte incertidumbre sobre el proceso electoral que en junio de 2015 elegirá al nuevo gobernador de Guerrero; ya que la CEGET ha declarado en diferentes ocasiones que no permitirá que éstas se lleven a cabo. Por su parte, y ante el fracaso de las pruebas con los restos humanos enviados a Austria, los familiares de los 42 estudiantes desaparecidos declararon, a través de Vidulfo González (su abogado y coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan), que para ellos sus hijos aún están vivos y no abandonarán su búsqueda. Por ello, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y miembros de organizaciones civiles se han unido a los padres de familia para mantener una “búsqueda ciudadana” permanente de los jóvenes en la región de Iguala.

El contexto

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa forma parte de instituciones similares fundadas en los años 20 del siglo XX en todo el país. Posteriormente el entonces presidente de la República, el emblemático general Lázaro Cárdenas del Río, fortaleció su funcionamiento. Este general, que expropió los bienes de la industria petrolera del país a empresas transnacionales y los puso en las manos del gobierno y la sociedad (aunque hoy con la Reforma Energética se ha dado fin a esto), se caracterizó por ejercer el poder desde una visión popular de apoyo a las masas trabajadoras. Es el gran “progenitor” del actual PRI, cuando en 1938 y bajo su gobierno el PNR (Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles) que aglutinó a los militares que encabezaron el movimiento armado de 1910 en contra del dictador Porfirio Díaz, cambió para ser el PRM (Partido de la Revolución Mexicana). Para 1946 el PRM cambiaría a PRI y presentaría como candidato a la Presidencia de la República a Miguel Alemán Valdez. Lo importante de la labor del general Cárdenas en este sentido partidista fue que bajo su tutela el PRM estructu-

5. En México, el movimiento sindical del magisterio se encuentra dividido entre dos organizaciones. La oficial, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), plegada al gobierno y dirigida por muchos años por Elba Esther Gordillo, hoy presa por enriquecimiento ilícito, desviación de recursos, lavado de dinero y asociación delictuosa; y la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), radicalmente opuesta al SNTE y muy movilizadora, sobre todo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La CETEG forma parte de la CNTE.

ró una organización de bases sociales, integradas por la central obrera CTM (Confederación de Trabajadores de México), la central campesina CNC (Confederación Nacional Campesina) y la central urbana CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares).⁶ Estos pilares le dieron fortaleza al partido que gobernó México por más de 70 años ininterrumpidos, y que hoy ha vuelto al poder con Peña Nieto después de 12 años de gobierno del PAN (Partido Acción Nacional). Con ello lograron imponerse a los embates de las fuerzas sociales de un partido conservador (PAN) que nació como inconformidad ciudadana de los empresarios, comerciantes y las clases medias y altas ante el “eterno” triunfo del PRI; y de la izquierda mexicana que se institucionalizó con el PCM (Partido Comunista Mexicano) y que durante los años 1960 y 1970 representó un serio contendiente por parte de las clases populares y, después con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (hijo del general Lázaro Cárdenas) y Andrés Manuel López Obrador desde el PRD, lo volvieron a hacer pero sin lograr como el PAN el triunfo a nivel presidencial.⁷

Pero regresando a las escuelas rurales, el general Cárdenas las fortaleció durante su gobierno (1934-1940) desde una visión para empoderar a los campesinos y a sus familias. Son formadores de profesores a nivel básico (primaria) y desde que se fundaron hasta nuestros días, estas escuelas representan la única posibilidad de que los hijos de campesinos logren estudios a nivel medio y superior y, así, cuenten con más elementos para sacar de la pobreza y la exclusión a sus familias. Posteriormente, como ya es conocido, la propuesta educativa de Cárdenas se basó en una visión de izquierda, e incluso buscó instaurar lo que llamó la “educación socialista” que pretendió formar a las grandes masas populares de México desde los objetivos de ayudar a superar las diferencias sociales y equiparar el bienestar social a partir de una repartición más justa de la riqueza nacional. A pesar de que en diferentes ámbitos la currícula escolar basada en la educación socialista fue paulatinamente abandonada, las escuelas rurales se afianzaron a ella. Lo anterior propició durante los últimos 80 años la vinculación de estudiantes de estas escuelas rurales con movimientos campesinos y populares, e incluso con movimientos guerrilleros.

La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fue fundada el 2 de marzo de 1926 por el propio Burgos (que le da su nombre) y el apoyo de cientos de campesinos de la región. Ha logrado la formación de 88 generaciones de profesores provenientes de las zonas más pobres de Guerrero y de otros lugares similares en México (Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tlaxcala y la ciudad de México) (UNIVISIÓN Noticias, 2014). Los guerrilleros Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas egresaron de sus aulas y sus movimientos armados estuvieron siempre vinculados con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Estos estudiantes se han enfrentado en diferentes ocasiones en contra

6. Se sabe que el plan inicial del general Cárdenas incluía también una central militar, pero ante el temor de que las fuerzas armadas intervinieran desde el partido en el Estado mexicano se dejó de lado. Su integración se dio más bien con privilegios y autonomía exagerada para sus integrantes, pero sobre todo para sus altos mandos.

7. Éstos son los tres grandes partidos que encabezan las preferencias de los mexicanos, entre otros más modestos: el PRI de centro-derecha, el PAN de extrema derecha y el PRD de izquierda.

del Estado mexicano y sus políticas. Por ejemplo, en 1941 tuvieron un fuerte conflicto con el entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho (PRI), quien mandó a apresar a varios alumnos de la escuela bajo la acusación de “insurrección”, después de que decidieran lanzarse a una huelga para exigir a su gobierno el presupuesto de ayuda que éste pretendió negar. La acusación se basó en el hecho de que los alumnos decidieron quitar la bandera mexicana izada en el asta del patio central de la escuela, para poner en su lugar la bandera rojinegra y con ello anunciar su movimiento de huelga; con la exigencia de no retirarla mientras no cumpliera el gobierno con su compromiso.⁸ En 1975 el Ejército mexicano ingresó y aseguró las instalaciones de esta escuela por órdenes del Presidente Luis Echeverría Álvarez (PRI), después de que el grupo guerrillero de Lucio Cabañas secuestrara al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa. Con la llegada del siglo XXI los estudiantes de Ayotzinapa centraron su lucha en contra de los recortes cada vez más severos de su presupuesto (que incluso han amenazado en repetidas ocasiones con su desaparición) y, especialmente, para exigir otro de los compromisos que el Estado mexicano tiene con estas escuelas rurales: la dotación de plazas para sus egresados como profesores en escuelas primarias públicas de la región. En 2005, 2007 y 2011 los estudiantes bloquearon la “Autopista del Sol” (que conecta a la ciudad de México con Acapulco, el principal centro turístico para los mexicanos) y han sitiado la sede del Congreso de Guerrero en repetidas ocasiones. Lo que ha provocado fuertes enfrentamientos con detenidos, heridos e incluso muertos (UNIVISIÓN Noticias, 2014). Actualmente los estudiantes de Ayotzinapa han sido vinculados por el Estado mexicano, el gobierno estatal y las fuerzas armadas con el movimiento guerrillero del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), organización que se dice nutre sus cuadros con estos jóvenes. Además, el vínculo directo de sus estudiantes con la CNTE a través de la CETEG, organización magisterial mencionada que ha sido muy combativa especialmente en la zona más pobre del país (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) y la capital de la República, han posicionado a estos estudiantes como parte de los “enemigos públicos” más “peligrosos” para el Estado mexicano.

Las implicaciones profundas

Son variadas y muy complejas las implicaciones de los actos lamentables sucedidos en Iguala en septiembre de 2014. A mi entender tienen que ver con la evidencia de una fuerte crisis de legitimación del Estado mexicano al interior y exterior del país,⁹ tanto por la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto para brindar seguridad a los ciudadanos y resolver, de manera transparente y ex-

8. Una característica más de estas escuelas rurales es que desde su fundación tienen la obligación no solo de instruir a los futuros profesores de primaria, sino que además deben brindarles lugares para vivir y la dotación de alimentos y atención médica gratuita.

9. Véase, por ejemplo, la fuerte crítica por parte del diario ‘The Economist’ (La Jornada, 2015f) al llamar como “pantano mexicano” la situación que ha provocado Peña Nieto en lo que va de su periodo de gobierno.

pedita, este tipo de acciones provenientes de quienes dirigen las instituciones públicas en México; como por demostrarnos a los mexicanos y a la comunidad internacional que opera en este país lo que Reguillo (2014) ha nombrado acertadamente como la “narco máquina”, “[...] esa articulación terrible entre los poderes propietarios (políticos, económicos, delincuenciales) [...]”. Por un lado, y tratando de “lavarse las manos”, el equipo de Peña Nieto mantuvo una posición inaceptable al abordar en las primeras semanas estos sucesos como responsabilidad única de las autoridades locales.¹⁰ Sólo había que capturar y encarcelar a José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda por lo sucedido, que se originaba en sus vínculos con el crimen organizado y la falta de control por parte del PRD de sus militantes y funcionarios en Guerrero. Un caso aislado, de exagerada barbarie sí, pero meramente situado. Nada tan lejos de nuestra realidad.

“[...] tan solo en 2012 habían fallecido 20.658 jóvenes por causas violentas. La muerte por agresión para hombres y mujeres alcanzó en ese año el 44.1%, 16.298 vidas jóvenes cegadas por las violencias directas que azotan este país. Estos datos a los que se sumaban otros, muchos datos terribles que se fueron acumulando desde 2006, deberían haber bastado para declarar un estado de emergencia nacional. Pero no fue así. En estos días terribles, ha dicho Javier Sicilia, el poeta que dejó de serlo por el dolor que lo atravesó sin aviso, cuando su hijo fue ejecutado, que **‘el PRI creyó que podría administrar el infierno’**. Nada más cierto” (Reguillo, 2014).¹¹

La situación de violencia iniciada en 2006 por el entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa (PAN),¹² a partir de la instauración de lo que llamó la Guerra en Contra del Crimen Organizado, ha producido en México hasta 2014 según distintas fuentes, entre 20 mil y 45 mil muertos (víctimas de sicarios, de secuestradores, de asaltantes, de extorsionistas, policías, soldados, delincuentes, funcionarios, eclesiásticos y las llamadas “víctimas colaterales”), entre los cuales la inmensa mayoría son jóvenes varones.

A su vez, al buscar enfrentar el caso desde una supuesta preocupación performativa desde los medios de comunicación por el bienestar de los jóvenes estudiantes y la imperiosa necesidad de encontrarlos vivos (o sus restos) para tranquilidad de sus familias, intentó normalizar (naturalizar) la violencia institucional, paralegal e ilegal que se evidenciaba en la zona con cada fosa clandestina descubierta día a día.

“Hemos llegado a tanto que el Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Karam, salió a decir, casi aliviado, que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fo-

10. Como parte de esta postura, Enrique Peña Nieto se adhirió a una campaña de protesta, a través de ‘Twitter’, que exigía la aparición de los estudiantes (#TodosSomosAyotzinapa); lo que le trajo multitudinarias críticas y la desaprobación generalizada al impulsar otra campaña más (#TuNoEresAyotzinapa). Miles y miles de cibernautas exigían dejar claro que Peña Nieto no podía presentarse así con semejante desfachatez y mejor que se encargara de encontrar a los jóvenes estudiantes.

11. Negritas y subrayado en original.

12. Calderón Hinojosa (2006-2012) sustituyó en la Presidencia de la República a Vicente Fox Quezada (2000-2006), siendo estos periodos los únicos en la historia de México que no han sido encabezados por el PRI.

sas clandestinas ‘descubiertas’ en Iguala [...] no correspondían a los de los normalistas, puf, ¿alivio? Quiénes son entonces esas 28 personas, desde cuándo están ahí, por qué. Las preguntas se atragantan” (Reguillo, 2014).

El funcionar de la llamada “narco máquina” dejó una cruel enseñanza: a pesar de que en el discurso oficial se siga manejando la idea de que el crimen organizado se ha infiltrado entre los funcionarios de diversos niveles del gobierno, que ambos se han coludido; la verdad es que ya no es pertinente distinguir entre ambos. Son uno solo: funcionarios y criminales pertenecen a las mismas familias, conviven en fiestas, desayunan y cenan juntos, se suceden en los puestos de gobierno. El ejemplo está en este propio caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de María Ángeles Pineda y uno de sus hermanos (Salomón) fueron detenidos en 2009 por narcotráfico. Sus padres están presos, el hermano fue inexplicablemente liberado y se sospecha que tuvo participación en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Otros dos de sus hermanos (Alberto y Mario) fueron asesinados en el mismo año en rencillas entre cárteles de la droga. La “pareja siniestra” de Iguala fueron criminales y funcionarios públicos simultáneamente.

“Tres de los hermanos Pineda Villa – Alberto, Mario y Salomón –, cuñados del [entonces] prófugo exalcalde de Iguala José Luis Abarca, dieron origen al Cártel Guerreros Unidos. La vida de esa familia se inscribe en la historia de la lucha por el control de la Tierra Caliente guerrerense, disputada por las mafias al ser ruta estratégica del narcotráfico. Primero al servicio del Chapo Guzmán y luego a las órdenes de los Beltrán Leyva, Alberto y Mario murieron en 2009. Salomón fue detenido ese mismo año, pero quedó libre por deficiencias en la averiguación previa y hoy está señalado como uno de los autores del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Y pese a que las autoridades lo dieron por capturado el jueves 9 [de octubre de 2014], en realidad ahora mismo nadie sabe dónde está. [...] Según la causa penal 101/2009, a la que tuvo acceso este semanario, El Salo [...] fue detenido en Cuernavaca junto con su padre Salomón Pineda Bermúdez, su madre Leticia Villa Ortuño y nueve personas más el 5 de mayo de 2009, en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, encabezada por Genaro García Luna. Antecedentes y testimonios ministeriales señalaban al Salo y a sus hermanos como narcotraficantes que operaban en Guerrero y Morelos por lo menos desde 2002, primero en forma independiente, después como jefes operativos del Cártel de Sinaloa y luego de los Beltrán Leyva. [...] En 2005, por instrucciones del Cártel de Sinaloa, los hermanos formaron una célula de sicarios llamada Los Pelones, para controlar Guerrero. [...] ese grupo fue el antecedente de Guerreros Unidos, el grupo delictivo presuntamente responsable del ataque del 26 de septiembre en Iguala mientras María de los Ángeles Pineda Villa rendía su segundo informe como responsable del DIF municipal.” (Hernández, 2014).

Lo más alarmante de todo esto es que tanto el PRD local (Guerrero) y nacional, así como el gobierno mexicano estaban plenamente enterados de los antecedentes familiares de la “pareja siniestra” y su pertenencia directa al Cártel Guerreros Unidos. Aun así, el PRD pretendía postular como candidata a la Alcaldía de Iguala a María de los Ángeles Pineda para el periodo 2015-2018. ¿Cómo explicar esto coherentemente?

La ineficacia del gobierno mexicano en la resolución de este caso ha sido señalada y cuestionada desde diferentes instancias dentro y fuera de México. No solo los errores técnicos en el levantamiento de pruebas, la negativa de transparentar la información obtenida, el desinterés manifiesto de muchos de sus funcionarios (especialmente el ya “cansado” Murillo Karam) y la instauración de un dialogo conciliatorio que logre revertir la situación de ingobernabilidad en Guerrero. Además, se ha señalado que la PGR simplemente no ha querido abrir y seguir la línea de investigación sobre la muy probable complicidad del Ejército mexicano en los sucesos de Iguala, aun cuando hay claros indicios sobre ello (La Jornada, 2015c). Y lo que intentó el gobierno mexicano desde el inicio de las averiguaciones de solidarizarse con las familias de los desaparecidos, al anunciar que la PGR trabajaría “hombro a hombro” con ellos en la búsqueda de los estudiantes, se ha roto; ya que dicha instancia se había comprometido a informar previamente a los padres de familia de cualquier hallazgo o avance en la investigación. La noticia de que la Universidad de Innsbruck había fracasado en el reconocimiento del ADN de los restos humanos que le envió el gobierno mexicano, llegó a Ayotzinapa a través de las noticias nacionales y no con antelación por parte de la PGR. La “cereza en el pastel” fue que, en esta ocasión, Murillo Karam declaró que “para él” no había duda de que todos los estudiantes habían sido asesinados y sus restos calcinados en el basurero de Cocula; sin contar con todas las pruebas fehacientes para llegar a semejante conclusión (La Jornada, 2015d).

Pero también se debe considerar la capacidad del gobierno de Peña Nieto, coludido con Televisa,¹³ para “endosar” la responsabilidad de la crisis política que se vive en México a la izquierda mexicana, a través de la imagen del PRD. Las noticias, reportajes, documentales etc., que esta televisora ha emitido sobre el caso de los 43 (ahora 42) estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, han mantenido insistentemente el origen partidario del ex gobernador de Guerrero (Aguirre Rivero), y de la “pareja siniestra” de Iguala (Abarca y Pineda). Ello se ha usado mediáticamente para desprestigiar a dirigentes de ese partido, como Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, al mostrar fotografías y videos en los que aparecen con José Luis Abarca apoyando su campaña política como candidato a la Alcaldía de Iguala; así como también a otros personajes de izquierda, como Andrés Manuel López Obrador, hoy dirigente de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional).¹⁴ Se les ha acusado de conocer los antecedentes de Abarca y su esposa y, aun así apoyar sus candidaturas. Sistemáticamente desde los sucesos de Iguala y, sobre todo, a

13. La empresa Televisa, encabezada por Emilio Azcárraga Jean (hijo de su fundador), junto con TV Azteca, encabezada por Ricardo Salinas Pliego, son las televisoras más prominentes en México y se han erigido como centros de poder político destacados. Televisa siempre ha estado más cerca del PRI, mientras que TV Azteca lo ha estado del PAN. Para el caso del vínculo entre Televisa y el PRI basado en tráfico de influencias, corrupción, impunidad, manipuleo de audiencias, etc., es recomendable la cinta ‘La dictadura perfecta’, dirigida por Luis Estrada y producida en 2014.

14. Andrés Manuel López Obrador fue militante del PRD durante muchos años. Con su apoyo, fue titular del gobierno de la ciudad de México y candidato a Presidente de la República (derrotado por Peña Nieto) en 2012. Hace dos años renunció al PRD por diferencias irreconciliables con el grupo Nueva Izquierda (conocido como Los Chuchos debido a que sus líderes son Jesús Ortega y Jesús Zambrano) (véase Milenio, 2014). Así, formó MORENA que obtuvo su registro oficial en el 2014.

partir de 2015 (por iniciar precampañas para las elecciones de junio de ese año), Televisa ha difundido en sus noticieros (especialmente el que se transmite de lunes a viernes en horario estelar, 10:30 PM, encabezado por Joaquín López Dóriga) una serie de notas en las que se vinculan a militantes y/o candidatos del PRD con el crimen organizado. Este vínculo se da también con los otros dos partidos “grandes” de México (PRI y PAN) y se dan a conocer,¹⁵ pero la insistencia día a día de las notas que involucran a miembros del PRD ha llevado a una fuerte crisis a este partido. Para empeorar las cosas, Jesús Zambrano se quejó a través de su cuenta en ‘Twitter’ de esta “campaña de desprestigio” por parte de Televisa hacia el PRD, y llamó a López Dóriga como “el vocero del apocalipsis”. Como una respuesta inmediata, el locutor de Televisa lo mencionó en su noticiero y acentuó la emisión de notas y reportajes sobre todo caso de corrupción de candidatos y gobiernos perredistas.

Por otra parte, a finales de 2014, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, hijo del general Lázaro Cárdenas y pilar y referente obligado de este partido, renunció a él debido a los errores que sus dirigentes cometieron en el caso de la “pareja siniestra”. Tras él se han suscitado varias renunciaciones de personajes muy reconocidos del partido, como Alejandro Encinas Rodríguez, Eloy Cisneros y Félix Salgado Macedonio. Pero incluso se habla de renunciaciones en “cascada” y que en los próximos meses seguirán dándose. A ello se suma que a inicios de 2015 el senador por el PRD, Armando Ríos Piter, anunció públicamente su desistimiento por contender como precandidato de este partido a la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones. Su argumento fue que Jesús Ortega le condicionó ser el candidato oficial para ese puesto siempre y cuando “pactara” con Aguirre Rivero y, aseguró, el pacto tendría que ver con no involucrar a futuro al ex gobernador de Guerrero en cualquier investigación referente al caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (El Universal, 2015). Y la indignación del pueblo guerrerense llegó muy alto al darse a conocer que el propio PRD impulsa como precandidato a la alcaldía de Acapulco a Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero, quien fue obligado a renunciar a su cargo tras los sucesos de Ayotzinapa.

Única salida: refundar el Estado

Para cerrar el presente texto me parece pertinente delinear lo que se coloca en la agenda política mexicana como, tal vez, la única salida viable de la crisis de legitimación que se cierne sobre el Estado mexicano desde los sucesos de Ayotzinapa. Crisis aderezada con los escándalos de gastos exorbitantes por parte de Peña Nieto a través del tráfico de influencias de su gobierno, la cerrazón antidemocrática de su postura, los casos de actos ilegales, de corrupción e impunidad de las fuerzas armadas y de los funcionarios públicos, y los actos de represión abierta hacia diferentes colectivos, comunidades y

15. Se calcula que el 72% de las alcaldías del país están infiltradas por el crimen organizado (Revolución Tres Punto Cero, 2014).

movimientos sociales en resistencia. Esta situación ha llegado a los límites al quedar instaurada la “narco máquina” como sustento del Estado mexicano y llevarnos a la población a una realidad violenta e insegura originada por la llamada Guerra en Contra del Crimen Organizado emprendida en 2006 por Felipe Calderón (PAN). Es necesario iniciar identificando las perversas consecuencias de esta guerra en la que se montó el Estado mexicano en contra de los principales cárteles de la droga en México. Hasta antes de comenzar esta iniciativa, las organizaciones criminales se centraban en el trasiego de sustancias ilícitas a lo largo del territorio nacional en su camino de Sudamérica hacia los Estados Unidos; delimitando las rutas de cada organización y repartiéndose así la moderna “gallina de los huevos de oro”. Calderón, con una política de mano dura que criminalizó un problema de salud pública a encomienda del gobierno de Estados Unidos, no solo no logró controlar esto y encarcelar a los principales capos. Lo que se suscitó fue, por un lado, la “diversificación de actividades redituables” para estos criminales al sumar al tráfico de sustancias ilegales el secuestro, la prostitución y la trata de blancas, las extorsiones, la trata de migrantes centroamericanos en su camino a los Estados Unidos, el robo de combustible, la clonación de tarjetas bancarias, entre otros. Y por el otro lado, el surgimiento de enfrentamientos directos entre los diferentes cárteles ante este “crecimiento empresarial” e, internamente, ante la detención o muerte de algunos de sus mandos operativos. Las organizaciones criminales más “tradicionales” en México, como el Cartel de Sonora, el de los Beltrán Leyva, el Cartel de Juárez, el Cartel del Pacífico tuvieron escisiones de las que surgieron otras organizaciones más violentas como los Zetas, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, los Rojos, el Cartel Jalisco Nueva Generación y algunos otros. Más inteligentes que el Estado mexicano, los criminales se fortalecieron y se volvieron más violentos, además de lograr infiltrarse en los partidos políticos y en los gobiernos locales, provinciales y federal. Empezaron a financiar campañas políticas que después les cobrarían a los funcionarios electos, y lograron imponer a candidatos salidos de sus propias filas para controlar así a las fuerzas del orden en diferentes regiones del país. Se dice que en muchas alcaldías, estos cárteles no solo nombran al jefe de seguridad pública y a los mandos policiacos; sino que más allá, definen y realizan los “operativos policiacos” que supuestamente buscan acabar con sus acciones y convierten a los cuerpos de seguridad especializados (anti secuestros, anti drogas, anti robos, etc.) en las “escuelas” formadoras de los principales delincuentes que encabezan precisamente tales delitos. La situación actual también es una de las consecuencias de no haber enfrentado todo esto desde una visión de prevención, más que de mano dura y militarización.

El próximo 5 de febrero de 2015, a unos escasos días de haber escrito el presente texto, se anunciará en México una iniciativa ciudadana propuesta por activistas reconocidos en el país, llamada Congreso Constituyente.¹⁶

16. Entre sus promotores están los obispos Raúl Vera y Magdiel Sánchez, el poeta Javier Sicilia, el sacerdote Alejandro Solalinde, Marcos Tello y el pintor Francisco Toledo.

“[...] desterrar un gobierno que se convirtió en ‘un verdadero peligro’, acabar pacíficamente con las relaciones de explotación y convocar a un Congreso Constituyente son las ideas en torno a las cuales comenzaron a aglutinarse algunos de los activistas más comprometidos del país [...]” (Matías, 2015).

Los políticos profesionales están prohibidos en esta iniciativa ciudadana, cuyos promotores en estos momentos se debaten en torno a dos posturas para las próximas elecciones, a tan solo unos meses de su realización: o bien promover a nivel nacional un boicot abstencionista, o el apoyo masivo a las candidaturas de ciudadanos independientes en detrimento de las que propongan los partidos políticos, cualquiera que sea.¹⁷ Se plantea iniciar disolviendo al Congreso de la Unión (Cámaras de Senadores y Diputados) para su total renovación con la participación exclusiva de ciudadanos reconocidos por su compromiso, honestidad y trabajo. Se critican, al concebirse como insuficientes, las medidas que hasta ahora ha tomado el equipo de Peña Nieto con la formación del Bando Único y la Gendarmería (fuerzas policíacas coordinadas desde la Federación) y la desintegración de las policías locales (alcaldías); así como la iniciativa de ley para supervisar que ningún candidato a puesto de elección popular tenga antecedentes y/o nexos personales o familiares con el crimen organizado, y un comité “anti corrupción” que fiscalice puntualmente el accionar de los funcionarios públicos. Ante esto la gente se pregunta, ¿por qué no se les había ocurrido antes algo tan elemental? ¿Y quién nos asegura que no se corrompan los anti corrupción?, como suele suceder cotidianamente en este país. ¿Solo esto basta para “limpiar” a nuestra clase política? Las respuestas son más que obvias.

Con los trabajos del Congreso Constituyente y las vicisitudes de las próximas elecciones de junio de 2015,¹⁸ los próximos meses serán decisivos en la historia política contemporánea de México. El hartazgo ciudadano deberá saber ser encauzado para cambiar las cosas de fondo. La lamentable pérdida de los estudiantes de Ayotzinapa, y de las decenas de miles de muertes y desapariciones de connacionales durante los últimos 10 años, nos enseñaron que esto no puede seguir así. Como se corea en marchas y mítines de protesta y resistencia: “¡ya basta!”, “¡ni un muerto más!”, “¡fue el Estado!”, “¡ni PRI, ni PAN, ni PRD!”. Tal parece que la población mexicana ha logrado madurar, ojalá pronto veamos las consecuencias de ello. Esta es la esperanza que surge después de la tragedia. Somos muchos los que deseamos que efectivamente así suceda.

REFERENCIAS

Hernández, Anabel (2014). “Los Pineda Villa, el clan fundador de la mafia guerrerense”. **Revista Proceso**. México, octubre de 2014 [<http://www.proceso.com.mx/?p=385199>].

17. Como parte de la más reciente Reforma Política, por primera vez en México se abre la puerta a las candidaturas ciudadanas, las que estaban prohibidas mientras los candidatos no pertenecieran a uno de los partidos políticos con registro al momento del proceso electoral.

18. No incluyen la Presidencia de la República.

- El Universal (2015). “¿Negociar? Es más fuerte el problema de Guerrero”. **Diario El Universal**. México, 13 de enero de 2015 [<http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/-8220negociar-es-mas-fuerte-el-problema-de-guerrero-8221-222172.html>].
- La Jornada (2015a). “Militares estuvieron en una clínica privada de Iguala luego del ataque a normalistas”. **Diario La Jornada**, México, 20 de enero de 2015 [<http://www.jornada.unam.mx/2015/01/20/politica/004n1pol>].
- La Jornada (2015b). “Innsbruck no pudo establecer un perfil genético de los restos”. **Diario La Jornada**, México, 21 de enero de 2015 [<http://www.jornada.unam.mx/2015/01/21/politica/003n1pol>].
- La Jornada (2015c). “Amnistía Internacional: fallida investigación de la PGR en caso Ayotzinapa”. **Diario La Jornada**, México, 22 de enero de 2015 [<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/22/amnistia-internacional-denuncia-que-pgr-ha-fallado-en-el-caso-ayotzinapa-6754.html>].
- La Jornada (2015d). “Critican expertos a Murillo por suponer que los 43 normalistas fueron asesinados en Cocula”. **Diario La Jornada**, México, 22 de enero de 2015 [<http://www.jornada.unam.mx/2015/01/22/politica/006n1pol>].
- La Jornada (2015e). “Jefes policiacos entregaron a los 43 a Guerreros Unidos”. **Diario La Jornada**, México, 23 de enero de 2015 [<http://www.jornada.unam.mx/2015/01/23/politica/005n1pol>].
- La Jornada (2015f). “El intercambio de favores entre el Presidente y empresarios favorece a AMLO [Andrés Manuel López Obrador]: *The Economist*”. **Diario La Jornada**, México, 23 de enero de 2015 [<http://www.jornada.unam.mx/2015/01/23/politica/014n2pol>].
- Matías, Pedro (2015). “Se suma el pintor Toledo a iniciativa para refundar el país”. **Revista Proceso**. México, 21 de enero de 2015 [<http://www.proceso.com.mx/?p=393780>].
- Milenio (2014). “‘Los Chuchos’ se quedan con el PRD hasta el 2017”. **Diario Milenio**. México, 06 de abril de 2014 [http://www.milenio.com/politica/Chuchos-quedan-PRD_o_275972414.html].
- Reguillo, Rossana (2014). “Ayotzinapa, el nombre del horror”. **Revista Digital Anfibia**. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín, octubre de 2014 [<http://www.revistaanfibia.com/en-sayo/ayotzinapa-el-nombre-del-horror/>].
- Revolución Tres Punto Cero (2014). “Narco en México: 72% de municipios infiltrados, 78% del PIB y 65% de campañas electorales financiadas”. **Diario Revolución Tres Punto Cero**. México, 10 de octubre de 2014 [<http://revoluciontrespuntocero.com/el-narco-en-mexico-72-de-municipios-infiltrados-78-del-pib-y-65-de-campanas-electorales-financiadas/>].
- Sin Embargo (2015). “25 de los 43 normalistas murieron por asfixia, dice ‘El Cepillo’; y que ‘a unos 15’ los mató él”. **Sin embargo.mx**. México, 24 de enero de 2015 [<http://www.sinembargo.mx/24-01-2015/1228469>].
- UNIVISIÓN Noticias (2014). “Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: semillero de luchadores sociales”. 08 de octubre de 2014 [<http://noticias.univision.com/article/2119522/2014-10-08/mexico/noticias/escuela-rural-de-ayotzinapa-semillero-de-luchadores-sociales>].

Resumen

El artículo comparte una lectura sobre los sucesos que desembocaron en la desaparición de 43 jóvenes de una escuela rural en Ayotzinapa. Expone lo sucedido para posteriormente contextualizar la realidad de estas escuelas que forman a los hijos de campesinos como profesores de primaria; basadas en la formación socialista, y vinculadas con movimientos sociales, campesinos, del magisterio e incluso guerrilleros. Se cierra con una interpreta-

ción sobre la fuerte crisis política del Estado mexicano provocada por estos sucesos, pero manipulada por el gobierno federal y Televisa para afectar más a la izquierda mexicana. El gobierno de Peña Nieto ha dado “carpetazo” a esto (cerrar el caso sin agotar las investigaciones) y los familiares han acudido a la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU. Mientras, los principales activistas del país proyectan una profunda refundación del Estado mexicano como única salida posible. “¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!”

Palabras-clave: jóvenes, violencias sociales, Estado mexicano, crisis política, Ayotzinapa.

Fecha de recepción: 28/01/2015

Fecha de aceptación: 15/02/2015



Rogelio Marcial

Profesor e investigador del Colegio de Jalisco y Departamento de Comunicación de Masas, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Guadalajara (México).

e-mail: rmarcial@coljal.edu.mx